

SENTENCIA N° 72 /2020

Expte. N° 184/926/2019

En San Miguel de Tucumán, a los 10 días del mes de JUNIO de 2020 reunidos los miembros del TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, Dr. José Alberto León (Vocal Presidente), C.P.N. Jorge Gustavo Jiménez (Vocal) y el Dr. Jorge Esteban Posse Ponessa (Vocal), a fin de resolver la causa caratulada: "TECOTEX S.A.C.I.F.I. Y A." S/ RECURSO DE APELACIÓN, Expte. Nro. 184/926/2019 y Nro. 46460/376-D-2013(DGR) y;

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de estudio y votación, dio como resultado: Dr. Jorge Esteban Posse Ponessa.

Por ello,

El Señor Vocal Dr. Jorge E. Posse Ponessa dijo:

I. A fojas 2117/2127 del Expte. N° 46460/376-D-2013, Francisco José de Rosa, apoderado de la firma, interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° D 704/18 de fecha 28/12/2018 emitida por la Dirección General de Rentas (fs. 2104/2108). En ella se resuelve HACER LUGAR PARCIALMENTE a la impugnación interpuesta por la firma **TECOTEX SACIFI Y A C.U.I.T. 30-51885553-7**, con domicilio en pasaje 2 de Abril N° 315, 2° piso – Oficina 21, de esta ciudad (CP4000), conforme planilla denominada "PLANILLA DETERMINATIVA N° PD:663-2013 – ACTA DE DEUDA N° A 663-2013 – ETAPA IMPUGNATORIA –" y DECLARAR ABSTRACTO el tratamiento del descargo interpuesto en contra del Sumario instruido N° M 663-2013.

Plantea la nulidad del Acta de Deuda por falta de causa, objeto y motivación. Le sorprende como la D.G.R. dispuso lisa y llanamente el rechazo de este planteo en la etapa impugnatoria. Como puede sostener que estaba debidamente fundada, que tenía causa y objeto válido si el importe de la misma bajó de seis millones de pesos a menos de uno.

Dr. JOSE ALBERTO LEON
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE E. POSSE PONESSA
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

C.P.N. JORGE GUSTAVO JIMENEZ
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Se queja de las retenciones que se le pretende cobrar por las operaciones concretadas con Duke Energy International South Cone S.R.L. Explica que durante los periodos reclamados, solo les ha vendido gas para su establecimiento en la provincia de La Rioja, por lo que todos los pagos efectuados no corresponden a bienes entregados y utilizados en Tucumán. En consecuencia, no correspondería practicar retenciones aún cuando la firma en cuestión estuviera dada de alta en la provincia de Tucumán.

Solicita se aplique la doctrina del fallo SINER S.A. s/ recurso de apelación Expte. (D.G.R.)18876/376-D-2012 y en consecuencia se proceda a la liquidación de intereses que eventualmente dejó de percibir el fisco local por la omisión de efectuar la retención y no como se pretende en estas actuaciones, que se abone el 100% de las retenciones supuestamente omitidas. Solicita se dicte como medida para mejor proveer librar oficio a la D.G.R. a fin que informe al TFA la situación fiscal de cada proveedor en los periodos 01/2009 a 07/2011.

Considera que ciertas operaciones se deberían determinar teniendo en cuenta el coeficiente de CM de cada proveedor al que la DGR tiene acceso y pleno conocimiento.

Con respecto a las operaciones realizadas con Bessone, entiende que pese a ser sujeto con alta en Tucumán, a la D.G.R. le consta que el coeficiente es menor a 0,10% y las operaciones quedarían alcanzadas por lo dispuesto en el artículo 4 de la RG 23/02, por lo cual se deberían eliminar de la determinación.

Solicita, bajo pena de nulidad, la integración al procedimiento administrativo de la totalidad de los proveedores cuyas operaciones se incluyeron en la Planilla Determinativa notificada junto a la Resolución N° D 704/18 para determinar si la obligación tributaria principal ha sido cumplida por el obligado principal y que dicha carga probatoria le corresponde a la D.G.R. Además le solicita a la misma, que pruebe si por las operaciones en la planilla determinativa que no fueron canceladas, operó o no la prescripción liberatoria.

Ofrece prueba y hace reserva de acciones judiciales.

II. A fojas 2209/2219 del Expte. N° 46460/376-D-2013 la Dirección General de Rentas, contesta traslado del recurso, conforme lo establecido en el artículo 148 del C.T.P.

Aclara que la prueba aportada por el apelante en la etapa impugnatoria fue insuficiente para concluir que no subsisten saldos a ingresar.

Considera improcedente la afirmación del apelante de que existirían irregularidades, por cuanto si se efectúa un análisis de las actuaciones administrativas contenidas en el expediente, se detecta que contrario lo que argumenta el apelante (afán recaudatorio del fisco), es el mismo el que no aportó documentación suficiente y necesaria conforme fuera requerida en las distintas instancias, colocándolo así en un estado de indefensión, no respondió a los requerimientos cursados en el tiempo y condiciones solicitados. Que en la instancia procedente se dio inicio al procedimiento de apertura a prueba informativa y pericial contable ofrecidas y sin embargo no fue producida. Por otro lado que libró medida para mejor proveer según Resolución N° 29/18 (fs. 2007), requiriendo documentación e información tendiente a clarificar argumentos impugnatorios y tampoco fue producida.

Explica que las sumas a las cuales hace referencia el apelante respecto de que en la etapa de la fiscalización la deuda notificada era de 6 millones de pesos y que luego al notificarse el Acta de Deuda N° A 663-13 la suma adeudada bajó a un monto menor a un millón de pesos. Ello se debió por un lado a que en esta última no se incluyó el periodo 2008, y que por otra parte ya expresamos que en la etapa impugnatoria se ajustó dicha deuda por dos razones; una, debido a que el agente aportó nueva documentación probatoria, y además porque se flexibilizó a favor del Agente algunas obligaciones normadas por la RG (DGR) 23/02, sus modificatorias y complementarias, interpelando a la "verdad material", y con ello dispensó al mismo de aportar pruebas sobre el carácter fiscal de cada sujeto y que se trata de información disponible para el fisco, procediendo a utilizarla para ajustar bases imponibles, excluir operaciones y reducir alícuotas, sin que en el procedimiento signifique que la determinación de oficio sea nula por falta de causa, ya que en la misma se consideró lo dispuesto por la RG antes mencionada. Reitera que el acto administrativo en cuestión resulta válido y ajustado a derecho.

Dr. JOSE ALBERTO LEON
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE E. POSSE JONESSA
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE GUSTAVO JIMENEZ
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Por lo expresado corresponde el rechazo del planteo de nulidad realizado por el apelante.

Al respecto de "Duke Energy International South Cone SRL" dice que mantiene los mismos argumentos que en la etapa anterior y que los mismos ya fueron tratados en la Resolución N° D 704/18 (fs. 2106 reverso) al cual se remite y confirma. Aclara que dicho sujeto fue objeto de una medida para mejor proveer no producida. Detalla la documentación aportada en esta instancia correspondiente a ese proveedor (fs. 2132/2153), concluyendo que además de no ser copia autenticada o certificada, se trata de documentación informal, que no incluye rúbrica de quien la expide, no incluyendo el periodo en crisis, y/o no incluye a Tucumán, por lo que resultan insuficientes a los efectos de probar los argumentos esgrimidos por el apelante en este punto.

Respecto a los agravios referidos a "ii. Retenciones no practicadas a contribuyentes locales doctrina fallo Siner", "Retenciones no practicadas a sujetos de convenio multilateral con alta en la jurisdicción de Tucumán" y "rechazo de integración de los contribuyentes al procedimiento. Inversión de la carga probatoria y enriquecimiento sin causa" los trata de manera conjunta y se remite a la resolución N° D 704/18 a fs. 2107.

Expone que en el citado acto se expresó que lo planteado remite a una cuestión de hecho y prueba. Que la actividad probatoria exige que el presentante aporte prueba concluyente y contundente de lo que pretende demostrar, en este caso, que el contribuyente directo canceló el impuesto sobre los Ingresos Brutos por la operación de venta que realizó con TECOTEX, lo cual no sucedió en ninguna de las instancias administrativas conforme surge del análisis del expte.

Aclara que las propuestas del apelante referidas a subsanar la solidaridad del Agente y que pone en cabeza del fisco la prueba, no corresponden ni lograría con ello el resultado buscado. Explica que los estados de cuenta no tienen información suficiente para desligar al agente de su responsabilidad. Por lo expuesto, la documentación arrimada en la instancia precedente como planilla N° 7 y estados de cuenta no fue considerada susceptible de practicar ajustes, situación que mantiene en esta instancia.

Por las operaciones donde el apelante solicita se aplique lo dispuesto en el artículo 7 segundo párrafo de la RG (DGR) N° 23/02 en la relación a la obtención

de las bases imponible indica que sobre las firmas: 1) Sodexho Pass (no incluida en el Anexo IV), 2) Autoelevadores Yale S.A. y 3) Interbanking S.A., en la etapa impugnatoria se ajustó aplicando lo normado por el segundo párrafo del artículo 7° de la RG (DGR) N° 23/02, sus modificatorias y complementarias, conforme se expresó en resolución N° D 704/18 fs. 2106 (reverso) a la cual se remite. En cuanto a las compañías de "SEGUROS: HSBC, seguros de vida, Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.; Royal & Sun Alliance Seguros y ALICO" se expide también en los considerandos de la misma resolución al cual se remite, advirtiendo que dicho sujeto fue incluido en la Resolución N° 219/18 de la medida para Mejor Proveer emitida y no fue producida.

Al respecto del proveedor Bessone explica que el apelante se equivoca al invocar el artículo 4 de la RG (DGR) N° 23/02. El artículo 4 de la RG N° 86/00 es la que se refiere a la dispensa otorgada para operaciones con sujetos cuyo coeficiente unificado sea menor a 0,10. Por lo expuesto correspondería el rechazo del planteo efectuado.

En cuanto a la omisión de verificar si existió ingreso directo del impuesto previo a pretender hacer valer la responsabilidad solidaria, cita la jurisprudencia y normativa aplicable, concluyendo que es obligación del agente demostrar que el contribuyente ingresó el impuesto correspondiente en su justa medida, situación que no acontece en autos.

Conforme Ley N° 4537, sostiene la presunción de legitimidad de todo acto administrativo. Entiende que los requisitos esenciales que debe revestir todo acto administrativo fueron cumplidos al emitirse el acto que se intenta impugnar.

Por otro lado, en cuanto a los argumentos utilizados para fundar el planteo de nulidad, considera son simplemente una expresión de disconformidad con la metodología aplicada, la cual es prueba de que en ejercicio de su derecho de defensa pudo impugnar el acto administrativo. Agrega doctrina al respecto.

Explica que la sanción de nulidad, reviste tal gravedad, que se requiere la acreditación efectiva y fehaciente de un vicio de trascendencia tal que haya provocado menoscabo o lesión cierta en el ejercicio del derecho de defensa de la parte afectada.

Dr. JOSE ALBERTO LEON
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE E. POSSE POMERO
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE GUSTAVO JIMENEZ
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Conforme lo expuesto entiende corresponde NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el agente TECOTEX S.A.C.I.F.I. Y A., contra la resolución N° D 704/18 de fecha 28/12/2018, debiendo confirmarse en su totalidad. Hace reserva federal del caso y ofrece prueba.

III. A fs. 17 del expte. 184/926/2019 obra sentencia N°375/19 de fecha 22/04/2019, dictada por este Tribunal, notificada el día 24/05/2019 donde se tiene por presentado en tiempo y forma el recurso, se declara la cuestión de puro derecho, se llaman autos para sentencia

IV. Confrontados los agravios expuestos por el apelante, con la respectiva contestación efectuada por la Autoridad de Aplicación y con los fundamentos exhibidos en la resolución atacada, corresponde emitir opinión.

Preliminarmente, y teniendo en cuenta el carácter preclusivo del planteo efectuado por el contribuyente en su recurso de apelación, corresponde expedirse con respecto a la prescripción de las obligaciones tributarias reclamados por la Autoridad de Aplicación.

El vencimiento fiscal de la Declaración Jurada correspondiente a la obligación fiscal 01/2009 - la más antigua del Acta de Deuda en discusión - se produjo el 10/02/2009 por lo que el cómputo del término de la prescripción para el citado periodo comenzó a correr a partir de dicha fecha. Consecuentemente si se cuenta 5 (cinco) años, la prescripción operaría el 10/02/2014. El Acta de deuda fue notificada el día 20/01/2014 (fs.1226) con anterioridad al 10/02/2014, y así los términos de prescripción que estaban corriendo se suspendieron por el lapso de seis meses, conforme surge del art. N° 3.986 del Código Civil: *"(...) La prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción."*, por lo que la nueva fecha de prescripción para el periodo 01/2009 pasó a ser el 10/02/2015. No obstante ello, con fecha 10/10/2014 y 27/08/2015 se interpusieron demandas de embargo preventivo (fs. 2073 y 2075), que tramitan por expte. judicial N° 5335/2014 y 3248/2015 respectivamente; por lo que quedó interrumpida la prescripción de la totalidad de los periodos incluidos en el Acta de

Deuda N° A 663-2013 correspondiente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Agente de Retención.

Corresponde remitirse al art. 25 del CTP, el cual en su inciso 5 expresa que cualquier interrupción de la prescripción, en favor o en contra de uno de los deudores solidarios, favorece o perjudica a los demás. Por lo tanto, habiendo sido interpuesta demanda interruptiva de la prescripción, contra el Agente de Retención, TECOTEX SACIFI Y A., en fecha 10/10/2014 Y 27/08/2015, la misma perjudica a los otros deudores que son solidarios con él en dichas obligaciones.

Razón por la cual no operó la prescripción para los contribuyentes principales (Sujetos Pasibles) y la totalidad de la determinación impositiva se encuentra exigible al momento del dictado de la presente resolución.

V. Respecto de la sanción de nulidad pretendida por el contribuyente, éste Tribunal en numerosas oportunidades ha establecido que, el postulado rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de los actos. La interpretación de la existencia de aquéllas es restrictiva (confr. art. 2° del C.P.P.N.) y sólo procede la declaración cuando por la violación de las formalidades resulta un perjuicio real, actual y concreto para la parte que las invoca, y no cuando se plantean en el único interés de la ley o para satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial (confr. Regs. Nos. 367/00, 671/00, 682/00, 1170/00 y 533/07, entre muchos otros, de esta Sala “B”).

Que, para que la nulidad de un acto se produzca por causa de vicios de la fundamentación, aquél debe mostrar omisiones sustanciales de motivación, o resultar autocontradictorio, o arbitrario por apartamiento de las reglas de la sana crítica, de la lógica, de la experiencia o del sentido común, o estar basado en apreciaciones meramente dogmáticas.

Estos defectos no se advierten en el acto recurrido, que ofrece una motivación suficiente de lo decidido, independientemente de la coincidencia, o no, que se pueda tener con aquellas conclusiones.

Siendo insuficientes los argumentos utilizados a los fines de lograr la sanción de nulidad del acto administrativo, el cual se presume legítimo, tal como lo establece

Dr. JOSE ALBERTO LEON
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE E. POSSE PONCESSA
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE GUSTAVO JIMENEZ
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

el artículo N° 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo, corresponde rechazar el planteo de nulidad intentado por el apelante.

VI. El expediente caratulado “*Siner SA s/Recurso de Apelación. Expte. N° 39/926/2016 (Expte. D.G.R. N° 18876/376-D-2012)*” trata sobre Agente de Percepción, dato no menor, por cuanto la postura asumida por este tribunal en ese caso, de que el hecho de haber presentado la correspondiente declaración jurada e ingresado el tributo por cada período involucrado en la determinación tributaria, resulte prueba suficiente para hacer lugar al planteo del apelante, surge porque las operaciones sujetas a percepción representan para el sujeto pasible, costos o gastos vinculados a sus ingresos por ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravados, y resulta de extrema complejidad verificar si dichas operaciones de compra o gastos se encuentran o no reflejadas en los ingresos **del mismo período** por el cual el contribuyente presentó la correspondiente Declaración Jurada, ya que **pueden configurar ingresos de períodos posteriores**.

Por ello se determinó que en los regímenes de percepción, que cuando el sujeto obligado a actuar como tal incumplió con su obligación, la sola demostración por parte del sujeto pasible de percepción de haber presentado la correspondiente declaración jurada y haber ingresado el tributo por cada período involucrado en la determinación tributaria, resulta prueba suficiente para hacer lugar al planteo del apelante.

Ahora bien, en los casos de Agente de Retención, para poder desligarse de la responsabilidad solidaria que pesa sobre el agente es necesario que el mismo demuestre que cada proveedor ingresó el impuesto no retenido, en su justa medida, lo cual implica desmostar:

- Que en los registros de ventas de los proveedores a los cuales se debió retener se encuentran debidamente incluidas las operaciones que integran la determinación efectuada.
- Que en la base imponible consignada en las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos presentadas por los proveedores mencionados se encuentran incluidos los montos de las operaciones que fueron susceptible de retención.

- Que los tributos correspondientes a las declaraciones juradas mencionadas fueron ingresados por los obligados principales.

Éste Tribunal considera que pesa en cabeza del Agente la responsabilidad de acreditar dicho anteriormente.

Así lo resolvió la CSJN en los autos *"Cintafon S.R.L. s/Recurso de Apelación"*; Sentencia del 03/04/1986 (Fallos 308:442): *"El agente de retención que voluntariamente o por propia negligencia no cumple con el deber de retener, deviene responsable del ingreso del impuesto debido, previéndose como única dispensa, la acreditación de que el contribuyente ingresó las sumas respectivas"*.

En autos, observo que la cuestión se reduce a la carga de la prueba respecto del cumplimiento del impuesto por parte del contribuyente no retenido.

Al respecto el máximo tribunal ha resultado que: *"La carga que el ordenamiento jurídico pone en cabeza del agente de retención se vincula con el sistema de percepción de los tributos en la misma fuente y atiende a razones de conveniencia en la política de recaudación tributaria pues aquél que es responsable del ingreso del tributo queda sometido a consecuencias de carácter patrimonial y represivas en caso de incumplimiento de sus deberes y puede ser dispensado de su obligación si acredita que el contribuyente ingreso esa suma"*. Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación in re *"San Juan S.A. (TF 29974-I) c/ DGI s/Recurso de Hecho"*, Sentencia del 27/10/2015 (Fallos 338:1156).

Respecto de la carga de la prueba y su incumplimiento se ha decidido: *"Ha destacado esta Corte Suprema de Justicia que a tenor de lo dispuesto por el art. 308 del CPCC, incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido, y cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho del dispositivo que invoque como presupuesto de su pretensión, defensa o excepción. De esta forma, el digesto procesal local ha adoptado como criterio para distribuir la carga de la prueba, aquél que atiende a la posición en que se encuentra cada una de las partes con respecto a la norma jurídica cuyos efectos le son favorables en el caso concreto (cfr. CSJTuc., sentencia N° 79 del 27/02/2001).*

Dr. JOSE ALBERTO LEON
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE E. POSSE PONCE
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE GUSTAVO JIMENEZ
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

En el mismo sentido, se sostuvo que *'La carga probatoria es un imperativo del propio interés, con lo cual su incumplimiento supone soportar el riesgo de dejar indemostrado el hecho que convenga al interés de la parte remisa'* (CSJT, *"Richardet Arnoldo Julio vs. Marquez Antonio Ramon S/Desalojo"*, sent nº 550 del 28/06/2000)". Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán - Sala Laboral y Contencioso Administrativo, in re *"Zeitune Isabel Sara vs. Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán s/ Sumario"*, Sentencia Nº 1565 del 13/12/2016.

Coincido con lo expuesto por la D.G.R. en cuanto a que es responsabilidad del agente demostrar lo expuesto en los párrafos precedentes. El artículo 120 del C.T.P., en su segundo párrafo, determina que los actos y resoluciones de la Administración Pública se presumen verídicos y válidos; su impugnación deberá ser expresa y la carga de la prueba corresponde al impugnante, en este caso al Agente de Retención

A más de la jurisprudencia citada, en virtud del art. 121 del C.T.P. *"Los actos y resoluciones de la Administración Pública se presumen verídicos y válidos; su impugnación deberá ser expresa y la carga de la prueba corresponde al impugnante."*

En conclusión, la carga de la prueba pesa exclusivamente en cabeza del agente incumplidor, por lo que el incumplimiento de dicha carga acarreará indefectiblemente la efectivización de su responsabilidad solidaria originada en la omisión de retener el tributo.

No caben dudas que en todo momento se mantuvo en resguardo el derecho de defensa del recurrente. Que se dispuso la apertura a prueba y fue el agente quien al no producir la prueba, no procedió a la integración de los sujetos pasibles de retención.

VII. Respecto a la aplicación de intereses por parte del Organismo Fiscal en la deuda determinada, se defiende la procedencia de los mismos, pues los intereses calculados tienen efectivamente un carácter resarcitorio, en tanto constituyen una indemnización debida al Fisco por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Los intereses resarcitorios se justifican por tratarse de una indemnización al acreedor cuyo

derecho de crédito se lesionó al no satisfacerse las deudas en el plazo establecido.

Ahora bien, la implementación del régimen de retención en la fuente, tiene como doble finalidad la recaudación anticipada de los tributos por parte del Organismo Fiscal y a su vez, constituye una herramienta para evitar o atenuar la evasión fiscal (se presume que a través de ellos el Fisco toma conocimiento previo de la existencia de la operación sujeta a dichos regímenes y que esto minimiza o anula el riesgo de que el sujeto pasible no la declare posteriormente en oportunidad de determinar el tributo correspondiente). No es menos cierto que la retención constituye para el sujeto pasible un ingreso a cuenta de la obligación final del periodo de que se trate. En este contexto y tal como se dijo a lo largo de la presente resolución, si la retención en la fuente no fue oportunamente efectuada y el sujeto pasivo del tributo (contribuyente) cumplió con su obligación de ingresar el impuesto en su justa medida a través de la presentación de la DD.JJ., entonces la obligación tributaria se encuentra satisfecha en cabeza de quien se verifica el hecho imponible sujeto al pago del impuesto. Y mal podría exigirse al agente de retención, con posterioridad al acaecimiento de dicha circunstancia, el ingreso de una suma (capital) a cuenta de una obligación tributaria que ya se encuentra plenamente cumplida.

Esta circunstancia no se presenta en autos ya que, el contribuyente, teniendo plena capacidad e innumerables oportunidades para demostrar el ingreso del impuesto por parte de los contribuyentes – cumpliendo los requisitos mencionados en el punto anterior - no lo hizo.

Razón por la cual en el presente caso, considero procedente el cobro del capital por la omisión de actuar como agente, así como también el cobro de los intereses derivados de esas obligaciones sobre las cuales el agente no demostró su efectivo ingreso.

VIII. Con respecto a la información consistente en los estados de cuentas de los sujetos pasibles (fs. 1801/1974) Planilla N° 7, la misma no resulta suficiente como

Dr. JOSE ALBERTO LEON
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE E. EISSE-PONESSA
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE GUSTAVO JIMENEZ
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

tampoco idónea, a fin de probar que el sujeto pasivo del tributo, ha pagado en forma directa el impuesto correspondiente en los períodos reclamados.

Esto es así, debido a que la información suministrada por la D.G.R. contiene datos globales por períodos lo que no permite establecer una relación entre las operaciones correspondientes a la determinación del agente de retención y las bases imponibles de Impuesto sobre los Ingresos Brutos del obligado principal en el periodo verificado. Para ello, es necesario demostrar que cada proveedor ingresó el impuesto no retenido en su justa medida, lo que implica que las operaciones incluidas en la determinación que aquí se discute, se encuentren registradas en los libros de cada proveedor, que en las bases imponibles de las declaraciones juradas correspondientes al impuesto sobre los Ingresos Brutos presentadas por estos se incluyan las operaciones mencionadas y, por último, que los tributos correspondientes a estas Declaraciones Juradas se encuentren ingresados.

Es por ello que los Estados de Cuenta resultan inconducentes para la dilucidación de la cuestión que se debate en autos, toda vez que el requisito exigido para eximir al agente de retención no queda cubierto por la información obtenida.

IX. Con fecha 06/03/18 la D.G.R. dispuso la apertura a prueba por el término de veinte (20) días, haciendo lugar a prueba informativa y pericial, ofrecida por TECOTEX SACIFI y A. No obstante ello y con el fin de preservar el derecho de defensa del Agente, también se dictó Medida para mejor Proveer, notificada el 16/03/2018 a través de Resolución N° 29/18 (fs. 2007) solicitando se aporte documentación e información a fin de constatar la aplicación de lo normado en el Anexo II, punto 2) inciso iii) de la RG (DGR) N° 23/02 modificatorias y complementarias.

Habiendo transcurrido los plazos otorgados para la apertura a prueba y de la medida para mejor proveer, el agente no procedió a la producción de ninguna de ellas, según surge en autos.

Adhiero a lo expresado por la D.G.R. en la Resolución apelada, en cuanto a que el Agente no ejerció su derecho de defensa mediante la debida probanza de los hechos contradichos o de justificación necesaria que resulten conducentes para la resolución del planteo y en búsqueda de la verdad material. No basta la sola

mención de argumentos para derribar la determinación de oficio efectuada por el fisco, sino que debe aportar toda la prueba de la cual intente valerse. Es por ello que corresponde rechazar los planteos.

Con respecto al proveedor Duke Energy International South Cone S.R.L., primero es importante señalar que estaba incluido en la medida para mejor proveer antes mencionada y no producida por el Agente; segundo, de la documental aportada en el recurso, correspondiente a este proveedor, Anexo I (fs. 2132/2154) y Anexo II (fs. 2155/2159) no se pueden obtener conclusiones que justifiquen ajuste alguno a la determinación de oficio practicada, es inconducente, contiene información aislada y no se refiere a los periodos en discusión.

En cuanto al proveedor Transportes Bessone S.A. coincido con la DGR en su escrito de contestación, al decir que el apelante se confunde al invocar el artículo 4 de la RG (DGR) N° 23/02. Es el artículo 4 de la RG N° 86/00 el que se refiere a la dispensa otorgada para operaciones con sujetos cuyo coeficiente unificado sea menor a 0,10. Por lo expuesto es que considero improcedente el planteo efectuado.

Por las operaciones donde el apelante solicita se aplique lo dispuesto en el artículo 7 segundo párrafo de la resolución N° 23/03 en relación a la obtención de las bases imponibles, la Administración indica, en su escrito de contestación, que sobre las firmas: 1) Sodexho Pass (no incluida en el Anexo IV), 2) Autoelevadores Yale S.A. y 3) Interbanking S.A., en la etapa impugnatoria se ajustó aplicando lo normado por el segundo párrafo del artículo 7° de la RG (DGR) N° 23/02, sus modificatorias y complementarias, conforme se expresó en resolución N° D 704/18 fs. 2106 (reverso). No surge de manera posterior nueva prueba que permita realizar más ajustes.

En cuanto a "SEGUROS: HSBC, seguros de vida, Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.; Royal & Sun Alliance Seguros y ALICO" y, como consecuencia de la escasa documental aportada, se dictó Medida para Mejor Proveer, la cual no fue producida, motivo por el cual no se procedió a efectuar ajustes por este proveedor.

Dr. JOSE ALBERTO LEON
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE E. FOSSE PONESSA
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE GUSTAVO JIMENEZ
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Se observa entonces, que la postura asumida por la D.G.R. cuenta con el aval de la doctrina sentada por la CSJN y que la determinación de oficio practicada se ajusta estrictamente a la normativa vigente que regula el régimen de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de esta provincia. En ese sentido, a los fines de determinar las alícuotas procedentes, determinar la base sujeta a retención, las exclusiones del régimen, se consideró lo dispuesto por la RG (DGR) N° 23/02, sus modificatorias y complementarias, por lo que el acto administrativo en cuestión debe considerarse válido y ajustado a derecho.

Por lo expuesto, concluyo que corresponde **NO HACER LUGAR** al Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución N° D 704/18 de fecha 28/12/2018 emitida por la Dirección General de Rentas y en consecuencia, **DEJAR FIRME** las obligaciones tributarias incluidas en planilla denominada "*Planilla Determinativa N° PD 663-2013 – Acta De Deuda N°: A 663-2013 – Etapa Impugnatoria*" en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Agente de Retención por un importe de \$227.902,97 (Pesos Doscientos Veintisiete Mil Novecientos Dos con 97/100) conforme lo expuesto en la presente resolución.

Así voto.

El Dr. José Alberto León dijo:

Que adhiere al voto y conclusiones a las que arriba el Dr. Jorge Esteban Posse Ponessa.

El C.P.N. Jorge Gustavo Jimenez dijo:

Que comparte el voto emitido por el Dr. Jorge E. Posse Ponessa

Visto el resultado del precedente acuerdo,

EL TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

RESUELVE:

1. NO HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por la firma **TECOTEX S.A.C.I.F.I. Y A C.U.I.T. N° 30-51885553-7** contra la Resolución N° D 704/18 de fecha 28/12/2018 emitida por la Dirección General de Rentas y en consecuencia, **DEJAR FIRME** las obligaciones tributarias incluidas en planilla denominada "*Planilla Determinativa N° PD 663-2013 – Acta De Deuda N°: A 663-2013 – Etapa Impugnatoria*" en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos -

Agente de Retención por un importe de \$227.902,97 (Pesos Doscientos Veintisiete Mil Novecientos Dos con 97/100) conforme lo expuesto en la presente resolución.

2. REGISTRAR, NOTIFICAR y devolver los antecedentes administrativos acompañados y **ARCHIVAR**.

S.G.B.

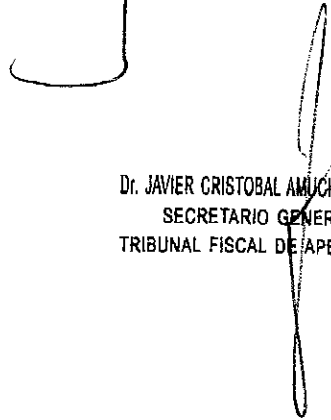
HACER SABER


DR. JOSE ALBERTO LEON
VOCAL PRESIDENTE


C.P.M. JORGE G. JIMENEZ
VOCAL


DR. JORGE E. POSSE PONESSA
VOCAL

ANTE MI


Dr. JAVIER CRISTOBAL AMUCHASTEGUI
SECRETARIO GENERAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION